

## Emergencia y compras públicas en la Costa Caribe

La emergencia ocasionada por la COVID-19 ha implicado medidas extraordinarias para el gobierno nacional y los gobiernos locales, lo que ha implicado también gastos extraordinarios. Este año en Colombia se han asignado \$33 billones de pesos del presupuesto general de la nación para atender la pandemia, poco más del 12% del total de lo que el gobierno gastará este año.

Para facilitar la labor de las autoridades, el gobierno nacional emitió nuevos lineamientos para abreviar los procesos de compras públicas y garantizar que las ayudas lleguen oportunamente. Si bien es incuestionable la necesidad de contar con procesos de contratación más rápidos, la disminución de las medidas de control también abre la puerta para que los inescrupulosos que se roban los recursos públicos se puedan aprovechar.

Ante esta situación, hay que tener especial vigilancia en la costa Caribe, donde los escándalos de corrupción de las administraciones locales son bastante frecuentes. Una manera en la que los ciudadanos podemos contribuir a monitorear el gasto es revisando las contrataciones públicas que están disponibles como datos abiertos. Los conjuntos de datos de los sistemas [SECOP I](#) y [SECOP II](#) tienen una frecuencia de actualización casi diaria y se pueden descargar y analizar para descubrir cómo están gastando nuestras autoridades.

A partir de un análisis propio, con datos al corte del 5 de noviembre, pude encontrar que en los departamentos de la costa Caribe se han celebrado 150,171 contratos de compras públicas en lo que va del año, lo que suma un total 13.2 billones de pesos. De estos, 6,015 contratos, con un valor total de \$606 mil millones (4.5% del gasto total), están identificados para atender directamente los efectos de la pandemia. Al revisar la distribución del gasto por departamento, Bolívar es el que ha dirigido la mayor cantidad de recursos para combatir la COVID-19, con \$172 mil millones, que representan 9.5% de las compras totales que ha hecho el departamento. Después de Bolívar, le siguen el departamento del Atlántico que ha gastado \$133 mil millones, Magdalena con \$74 mil millones y Córdoba con \$71.3 mil millones. La lista completa se puede consultar en el anexo de este artículo.

Dentro de los gastos para atender la COVID-19, el sector al que más se ha destinado dinero ha sido, de forma predecible, salud, con 24% de los recursos, seguido de “Servicios de edificación, Construcción de instalaciones y mantenimiento” con 19.3%, esto por la necesidad de modernizar mucha de la infraestructura pública de salud. Siguen otros gastos como los de “Alimentación, ropa y artículos de aseo personal” con 13.7% y servicios políticos y cívicos con 7.7%, que son los rubros bajo los que se etiquetó buena parte de las ayudas alimentarias y humanitarias que se repartieron entre la población. Otro gasto importante fue en el rubro de Servicios de Gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos con 12.8%.

Un dato revelador es que, comparado con el año 2019, la proporción de contratos adjudicados en la costa Caribe mediante el mecanismo de contratación directa se



duplicó, pasando de 30.4% a 60% de todos los procesos. Ahí es donde están los mayores riesgos y se debe ejercer mayor control y vigilancia.

Queda mucho más por analizar. Se puede revisar el historial de los proveedores, de las dependencias y buscar posibles inconsistencias entre el objeto del contrato y el monto asignado. Ya la asociación Transparencia por Colombia con su iniciativa [ciudadanía activa COVID](#) ha estado haciendo este trabajo de analizar los datos e ir incluso más allá revisando manualmente varios de ellos y denunciando irregularidades. El [portal de transparencia económica](#) también es una muy buena ayuda.

La pandemia continuará y la cuenta seguirá creciendo. Por el momento se cuenta con datos y herramientas para vigilar la contratación, lo que ya es un gran paso, pero también queda de parte de las autoridades controlar los abusos de la contratación directa, vigilar el correcto cumplimiento de los contratos y rendir cuentas claras en las decisiones de gasto.

Anexo:

- [Notebook con los cálculos.](#)



**Autor:**

Juan Javier Santos Ochoa

Maestro en economía

Científico de datos en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (México).

Email: [jj santosochoa@outlook.com](mailto:jj santosochoa@outlook.com)

